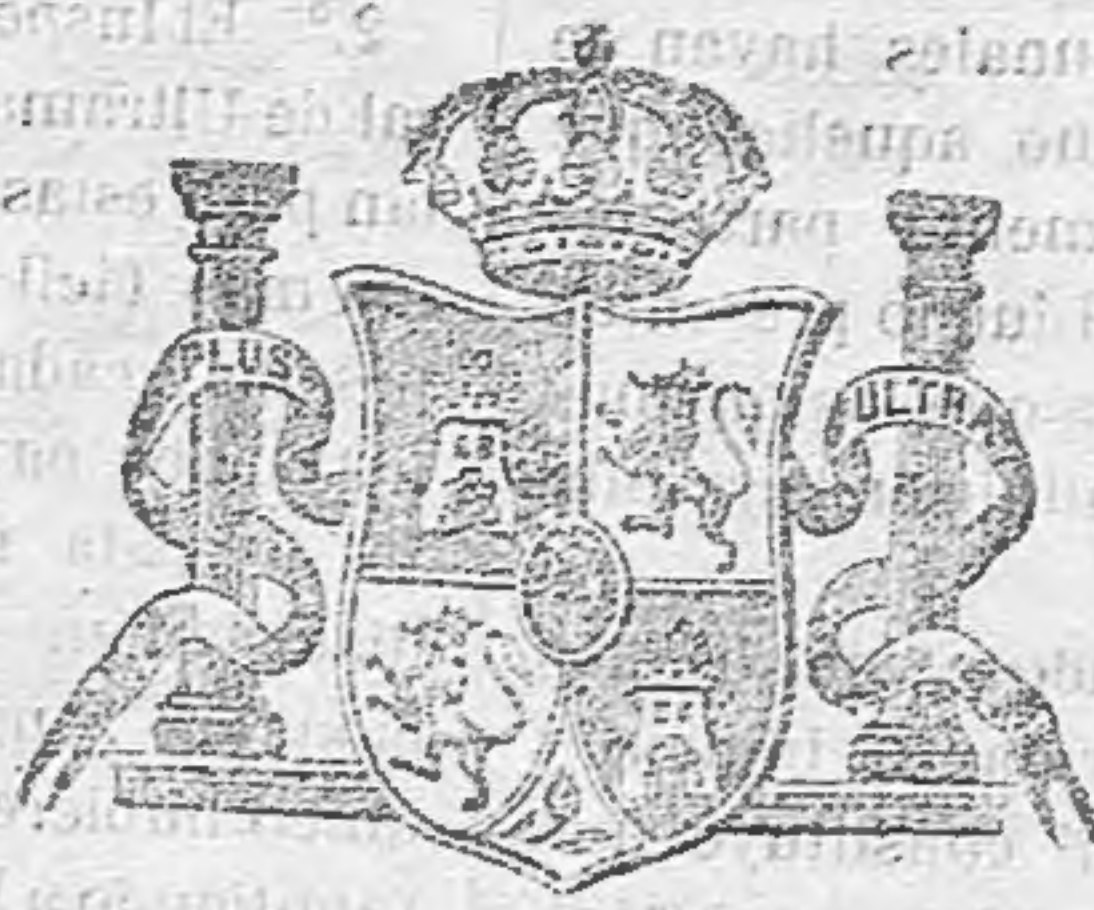


Boletín



Oficial

DE LA PROVINCIA DE ORENSE

Condición 23 de la subasta.—Por la inserción de edictos y anuncios oficiales que sean de pago, se satisfará por cada línea 25 céntimos de peseta, haciéndose la inserción precisamente en el tipo de letra que señala la condición 20.

Advertencia.—Las leyes obligarán en la Península, islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos a la legislación peninsular a los veinte días de su promulgación, si en ellas no se dispusiera otra cosa. Se entiende hecha la promulgación el día que termine la inserción de la ley en la *Gaceta* (Artículo 1.º del Código civil).

SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS EXCEPTO LOS FESTIVOS.

Precios de suscripción. { En Orense, trimestre adelantado, 5 pesetas.
Fuera, id. id. 6
Números sueltos. 0'25

Se suscribe en esta capital, en la **Imprenta de A. Otero, San Miguel, 15.**

Los originales comprendidos en la condición 23 de la contrata, no se publicarán sin previo pago, entendiéndose para esto con el contratista.

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey y la Reina Regente (Q. D. G.) y Augusta Real Familia continúan en esta Corte, sin novedad en su importante salud.

GOBIERNO DE PROVINCIA

Minas

Don Antonio Eleizégui, Ingeniero jefe de Minas de este distrito.

Hago saber: Que por providencia de 27 de Agosto último se ha servido el Sr. Gobernador admitir, sin perjuicio de tercero y salvo mejor derecho, una instancia de D. Pedro Martínez Fernández, vecino de Unión, solicitando el registro de doce pertenencias de hierro y otros metales, con el nombre de *Pedro*, en parage de Pena y Veiga, términos de Rubillón, Ayuntamiento de Avión, con la designación siguiente:

Se tendrá por punto de partida una cruz hecha a cincel en la cara Oeste de un crestón de pizarra en Pena de Rubillón y que domina la Vega del mismo nombre, desde el que se medirán en rumbo Norte 35º Oeste 100 metros para la primera estaca; al Oeste 35º Sur 300 para la segunda; al Sur 35º Este 300 para la tercera; al Este 35º Norte 400 para la cuarta; al Norte 35º Oeste 300 para la quinta y al Oeste 35º Sur 100 metros para concurrir a la primera estaca y cerrar el perímetro solicitado.

Lo que se hace público en virtud de lo prevenido en el art. 23 de la vigente Ley de Minas y más disposiciones.

Orense 3 de Septiembre de 1898.
—El Ingeniero jefe, Antonio Eleizégui.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REAL DECRETO

En el expediente y autos de competencia promovida entre el Gobernador civil de Barcelona y el Juez de instrucción de San Feliu de Llobregat, de los cuales resulta:

Que en una hoja impresa dirigida

a los habitantes de San Baudilio de Llobregat, y que además de estar suscrita por el Alcalde Presidente y el Secretario interino del Ayuntamiento, lleva otras ocho firmas, se manifiesta, entre otros muchos particulares, que el ex Alcalde D. Ramón Pi y el ex Secretario D. Pedro Secine habían publicado una hoja suelta en que se engañaba al vecindario con datos falsos; que en época en que el expresado Pi desempeñaba el cargo de primer Teniente Alcalde, y según noticias era el todo del Ayuntamiento, se convino en que cierta Comisión de un puente entregaría la cantidad de 6 358'50 pesetas, y verificada la entrega al siguiente día para pagar una casa, como quiera que el precio de esta finca se satisfizo con una suma

lar, preguntan los firmantes de la hoja si quiere explicarles el Sr. Pi en qué se invirtió la otra suma; que si se nombrase una Comisión de personas entendidas e imparciales, con seguridad que su dictamen sería rechazar la casi totalidad, si no todos, de los libramientos pagados de fondos del puente, por ilegales, injustificados e injustos, y de seguro que de su dictamen resultaría mucha materia penable; que se ha dado el caso de justificar algunos contribuyentes la entrega de cantidades al ex Alcalde Pi, por cuotas del repartimiento de consumos, y seguir todavía en poder del Recaudador los recibos de tales cuotas, que el vecindario está en la seguridad de que no hay hoy quien sea capaz de cobrar cantidades de encabezamientos sin poder e ingresar en fondos municipales sólo una parte de ellas, y que, a seguir como seguía la administración de los intereses comunales, con seguridad que, a no tardar, hasta la población entera hubiera desaparecido de su sitio:

Que el Procurador D. Esteban Vera, en nombre de D. Ramón Pi, presentó ante el Juzgado de instrucción de San Feliu de Llobregat querrela criminal contra los firmantes de la referida hoja, alegando que en ella se cometen los delitos de

calumnia e injurias con publicidad y por escrito, puesto que se dirigen a su representado expresiones que redundan en descrédito y menosprecio y se le atribuyen hechos que, de ser ciertos, constituirían delitos que dan lugar a procedimiento de oficio, indicándose en la querrela, con relación a la hoja suelta, las frases de ésta, que en sentir del querellante constituyen el delito de injurias, y las que también, en su sentir, constituyen la falsa imputación de los delitos de malversación de caudales públicos y de estafa:

Que los querellados solicitaron que la representación de D. Ramón Pi especificase los hechos que constituirían los delitos de calumnia e injurias, con objeto de que los acusados de ellos pudieran probarles para probar la verdad de las imputaciones que se suponen calumniosas e injuriosas, y el querellante presentó, en virtud de la expresada petición, escrito en que daba por reproducido el de querrela en lo que se refiere a dicho particular:

Que estando en tramitación el sumario, el Gobernador de Barcelona, a instancia de los querellados, y de acuerdo con la mayoría de la Comisión provincial, requirió de inhibición al Juzgado, fundándose en que los acusados de los delitos de calumnia y de injuria contra empleados o funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo, deben ser absueltos en el caso de que probaren la verdad de sus imputaciones, en que, con referencia al presente caso es indudable que en dicha prueba ha de tener una influencia notoria y decisiva la declaración de si el ex Alcalde D. Ramón Pi y San Feliu incurrió o no en las extralimitaciones y responsabilidades que le imputan los individuos que componen el Ayuntamiento interino; en que la declaración expresada sólo puede hacerla la Administración, única entidad en quien reside la exclusiva competencia para ello, a tenor de lo dispuesto en el art. 165 de la ley Municipal, y en que, constituyendo por lo mismo la referida

declaración una cuestión previa administrativa, se está en uno de los dos casos en que, por excepción, pueden los Gobernadores suscitir contiendas de competencia en los juicios criminales; citaba el Gobernador los artículos 470 y 475 del Código penal, el art. 165 de la ley Municipal vigente y el 2.º, 3.º, 5.º y 8.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887:

Que tramitado este incidente, el Juez dictó auto, en que sostuvo su jurisdicción, alegando: que la ordinaria es la única competente para conocer de las causas y juicios criminales, con la sola limitación comprendida en el art. 10 de la ley de Enjuiciamiento criminal, siendo los Jueces y Tribunales los que en dichos juicios juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado; que los hechos de que se trata en esta causa revisten los caracteres de delitos previstos y castigados en los artículos 467 y 471 del Código penal, correspondiendo por ello su conocimiento a la jurisdicción ordinaria, y que el objeto sobre que versa este proceso no está comprendido en ninguno de los dos casos en que el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, consiente a los Gobernadores promover cuestiones de competencia en los juicios criminales, ya que el determinar si los precesados han incurrido o no en sanción penal, según probaren o no la certeza del hecho criminal que hubieren imputado, en los términos y con arreglo a los trámites de la ley de Enjuiciamiento criminal, incumbe exclusivamente resolver a los Tribunales de justicia:

Que el Gobernador, de acuerdo con la mayoría de la Comisión provincial, insistió en su requerimiento resultando de lo expuesto el presente conflicto que ha seguido sus trámites:

Visto el art. 467 del Código penal, que dice: «Es calumnia la falsa imputación de un delito de los que dan lugar a procedimiento de oficio»:

Visto el párrafo primero del artículo 470 del expresado Código, se-

gún el que: «El acusado de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiere imputado»:

Visto el art. 471 del citado cuerpo legal, que define la injuria diciendo que es toda expresión proferida, ó acción ejecutada en deshonra, descrédito ó menosprecio de otra persona:

Visto el art. 475 del mismo, que dispone que al acusado de injuria no se admitirá prueba sobre la verdad de las imputaciones sino cuando éstas fueren dirigidas contra empleados públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de su cargo; en este caso será absuelto el procesado si probara la verdad de sus imputaciones:

Visto el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, que prohíbe á los Gobernadores suscitar contiendas de competencia en los juicios criminales, á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reservado por la ley á los funcionarios de la Administración, ó cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por la Autoridad administrativa alguna cuestión previa de la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios ó especiales hayan de pronunciar:

Considerando:

1.º Que el presente conflicto jurisdiccional se ha suscitado con motivo de la querrela presentada por el ex Alcalde de San Baudilio de Llobregat D. Ramón Pi contra los firmantes de una hoja impresa, tienen frases que redundan en deshonra, descrédito y menosprecio de su persona, y se le atribuyen hechos que de ser ciertos, constituirían los delitos de estafa y de malversación de caudales públicos:

2.º Que pudiendo revestir las frases é imputaciones de la hoja suelta los caracteres de los delitos de calumnia é injuria, y estando uno y otro comprendidos en el Código penal, por lo que es indudable que su averiguación y castigo corresponde á los Tribunales de justicia, depende solo la resolución que haya de darse á esta competencia de que se estime que existe ó no la cuestión previa que el Gobernador señala, ó sea de que se entienda que es ó no preciso que se suspenda la causa promovida con objeto de que la Administración, al examinar las cuentas municipales de San Baudilio de Llobregat, resuelva si son ó no ciertos los hechos que á D. Ramón Pi se atribuyen, para que, en caso afirmativo, puedan los querrellados probar la verdad de sus imputaciones:

3.º Que las cuestiones previas administrativas, cuya existencia determina en las causas criminales la competencia á favor de la Administración, con arreglo á lo dispuesto en el art. 3.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, son uellas de que puede depender el

fallo que los Tribunales hayan de pronunciar, pero no aquellas que sirvan de fundamento para las pruebas que en el juicio presenten las partes, siquiera que las mismas puedan á la vez influir en la resolución de la causa:

4.º Que tratándose de hechos imputados en forma de injuria y calumnia, lo cual constituye uno de los delitos marcados en el Código penal, la prueba de estos hechos ha de presentarse y ser apreciada oportunamente por el Tribunal ordinario, sin que, por lo tanto, pueda depender la tramitación de la causa de lo que resuelva en su día la Administración acerca de las cuentas municipales:

5.º Que no existiendo, por las razones expuestas, la cuestión previa que el Gobernador invoca, y no estando tampoco atribuido el conocimiento de los delitos de que se trata á los funcionarios de la Administración, no se halla la presente competencia en ninguno de los dos casos en que, por excepción, pueden promover contiendas de esta clase los Gobernadores de provincia:

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir que no ha debido suscitarse esta competencia.

Dado en Palacio á treinta y uno de Agosto de mil ochocientos noventa y ocho.—María Cristina.—El tros; Práxedes Mateo Sagasta.

MINISTERIO DE LA GUERRA

REAL ORDEN CIRCULAR

Excmo. Sr.: No siendo posible tener en la actualidad conocimiento exacto de los haberes atrasados que se adeudan á los individuos de tropa repatriados de Santiago de Cuba, por las diferentes situaciones que la mayor parte han tenido separados de sus Cuerpos, destacados ó desempeñando los múltiples servicios que la índole de la campaña ha obligado, y con el fin de facilitarles los auxilios necesarios en metálico, sin exponerse á satisfacer á muchos de ellos cantidades que no pudieran corresponderles, y que gravarían al Estado, sin que este tuviera fácil medio de reintegrarse:

El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver:

1.º A los sargentos y sus asimilados se les entregará 200 pesetas, y 100 á los cabos, cornetas y soldados, á cuenta de los haberes que se les adeudan, verificándose este pago á los interesados por las zonas de reclutamiento de la demarcación donde vayan á residir con licencia. Donde haya Depósitos de embarque efectuarán éstos los pagos, en lugar de las zonas.

2.º El Inspector de la Caja general de Ultramar dispondrá se remitan para estas atenciones, en la forma más fácil y conveniente, 30.000 pesetas á cada Coronel Jefe de zona.

3.º Los pagos se harán del 1.º al 15 de cada mes, y en los cuatro días siguientes rendirán su liquidación las zonas á los Centros de quien hubieren recibido el metálico, remitiendo á los mismos los recibos satisfechos bajo duplicada carpeta, de la que será devuelto un ejemplar con el conforme, y en vista del remanente que en aquéllas quede, se hará el nuevo envío de fondos que fuese necesario para continuar su distribución.

4.º Deberá hacerse el cobro de los haberes en las zonas ó Depósitos por los propios interesados, acreditando su personalidad con la licencia ó pase, refrendado por la Autoridad local del punto donde residan, con la fecha del día que emprendan la marcha para verificarlo, llevando extendidos y firmados los recibos de la cantidad que tienen que percibir, visados y sellados por la expresada Autoridad. Cuando los interesados residan en el mismo punto que la capitalidad de la zona, se les refrendará el pase y se visará el recibo por la Secretaría del Gobierno ó Comandancia militar, estampándose el sello de la dependencia.

Y 5.º Si el estado de salud de alguno de estos individuos le imposibilitara su presentación en la zona, dará aviso á la Guardia civil del puesto más inmediato, para que ésta se haga cargo del pase y recibo, y efectúe oportunamente el cobro, debiendo entregarse por la misma su importe al interesado tan pronto como sea posible.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y más exacto cumplimiento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.º de Septiembre de 1898.—Correa.—Señor....

(Gaceta núm. 245)

MINISTERIO DE HACIENDA

REALES DECRETOS

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros, de conformidad con lo informado por el de Estado en pleno y por la Intervención general de la Administración del Estado, y con arreglo á la ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se concede un crédito extraordinario de 500.000 pesetas á un capítulo adicional del presupuesto de Obligaciones de los departamentos ministeriales, Sección 6.ª, «Ministerio de la Gobernación», del corriente año económico 1898-99, para atender á los gastos que puedan ocasionar las medidas necesarias para prevenir y extin-

guir las enfermedades epidémicas exóticas y las que se padezcan en nuestro país.

Art. 2.º El importe del mencionado crédito extraordinario se cubrirá con el exceso que ofrezcan los ingresos que se obtengan sobre las obligaciones que se satisfagan, y, á no ser posible, con la Deuda flotante del Tesoro.

Art. 3.º El Gobierno dará cuenta á las Cortes del presente decreto.

Dado en Palacio á treinta de Agosto de mil ochocientos noventa y ocho.—María Cristina.—El Ministro de Hacienda, Joaquín López Puigcerver.

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros, de conformidad con lo informado por la Intervención general de la Administración del Estado y por el Consejo de Estado en pleno, y con arreglo á la ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se concede un crédito extraordinario de 500.000 pesetas á un capítulo adicional del presupuesto de Obligaciones de los departamentos ministeriales, Sección 6.ª, «Ministerio de la Gobernación», del corriente año económico 1898-99, para remediar en lo posible los daños causados por las inundaciones en las provincias de Palencia, Burgos, León y Galicia.

Art. 2.º El importe del mencionado crédito extraordinario se cubrirá con el exceso que ofrezcan los ingresos que se obtengan sobre las obligaciones que se satisfagan, y, á no ser posible, con la Deuda flotante del Tesoro.

Art. 3.º El Gobierno dará cuenta á las Cortes del presente decreto.

Dado en Palacio á treinta de Agosto de mil ochocientos noventa y ocho.—María Cristina.—El Ministro de Hacienda, Joaquín López Puigcerver.

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Ministros, de conformidad con lo informado por el de Estado en pleno y por la Intervención general de la Administración del Estado, y con arreglo á la ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Se concede un crédito extraordinario á un capítulo adicional del presupuesto de Obligaciones de los departamentos ministeriales, Sección 6.ª, «Ministerio de Fomento», del corriente año económico 1898-99, importante 95.000 pesetas, para satisfacer por adelantado, durante el ejercicio del mismo año, la suma que la Diputación provincial de Madrid entregaba directamente para el sostenimiento parcial de las Clínicas de la Facultad de Medicina.

Art. 2.º La cantidad que trimestralmente deba satisfacer dicha Cor-

